

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña Elena Alonso Berrio-Atehortua, Secretaria del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,

Por el presente edicto, dimanante del procedimiento, autos número D-176/1998, ejecución número 178/98, iniciado a instancia de don Francisco Bernal Llorente y otros, contra don Cruz Antonio Fernández Velilla Pérez Sevilla y otros, hace constar que en el día de la fecha se ha ordenado sacar a subasta el siguiente bien embargado como propiedad de la parte demandada, cuya relación y tasación es la que se incluye a continuación, así como las condiciones de las subastas.

Bien que se subasta, con el correspondiente valor de tasación y justiprecio del mismo:

Finca número 5.739-N. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto (Madrid).

Valor vanal: 17.138.013 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en primera subasta, el día 19 de enero de 2000; en segunda subasta, en su caso, el día 16 de febrero de 2000, y en tercera subasta, también, en su caso, el día 15 de marzo de 2000, señalándose para todas ellas como hora la de las doce, y se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrán los deudores librar el bien, pagando el principal, intereses y costas; después de celebrado quedará la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley Enjuiciamiento Civil).

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar, previamente, haber depositado el 20 por 100, al menos, del valor del bien que hayan servido de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos (artículo 1.500 de la Ley Enjuiciamiento Civil), y ello exclusivamente mediante resguardo acreditativo de depósito en la cuenta corriente número 2501, que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de la calle Basílica, 19, de Madrid.

Tercera.—El ejecutante y quienes pudieran subrogarse legalmente en su lugar, podrá tomar parte en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la Ley Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito, en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la Ley Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—La primera subasta tendrá como tipo el valor de tasación del bien, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes del precio que sirve de tipo para esta subasta.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes del precio que sirve de tipo para esta subasta.

Séptima.—En tercera subasta, si fuera necesario celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. Si hubiere postura que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales, solidarios y subsidiarios tendrán el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días; de no hacerse uso de este derecho se alzaré el embargo (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Octava.—De quedar desierta la primera subasta, el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien por las dos terceras partes de su avalúo, o que se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la segunda subasta, el actor podrá pedir, o la adjudicación del

bien por las dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo por esta segunda subasta, o que se la entreguen en administración para aplicar sus productos al pago de los intereses y extinción del capital.

Novena.—Que el precio del remate deberá cumplimentarse dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del mismo.

Décima.—Subastándose bienes inmuebles, se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulación obrante en autos, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate (artículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria).

Undécima.—Si la adquisición en subasta se realiza en favor de parte de los ejecutantes y el precio de adjudicación no es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación deberá serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Duodécima.—Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes o por los responsables legales solidarios, o subsidiarios, podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes de este proceso en particular, una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación procesal, se expide el presente en Madrid a 4 de octubre de 1999.—La Secretaria judicial, Elena Alonso Berrio-Atehortua.—41.020.

SANTANDER

Edicto

Don Miguel Sotorrio Sotorrio, Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Santander,

Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número 3, registrado con el número 523/1995, ejecución número 65/1996, a instancia de don Ignacio García Gutiérrez, contra «Frontón Santander, Sociedad Limitada», en reclamación sobre rescisión, en providencia de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte días, el siguiente bien embargado como propiedad de la parte demandada, cuya relación y tasación es la siguiente:

Bien que se subasta y su valoración

Urbana número 2. Local existente en la planta baja de la casa números 33 y 35 de la calle Magallanes, de la ciudad de Santander, con una superficie aproximada de unos 2.261 metros cuadrados, con las instalaciones de agua, alcantarillado y corriente eléctrica. Lindando: Al norte, su frente, calle Magallanes, locales segregados de éste, números 33 y 35 de dicha calle; al sur, espalda, casa números 22 y 26 de la calle San Luis y terraza del semisótano correspondiente a la salida de la calle San Luis; al este, izquierda, entrando a la casa, casa número 31 de la calle Magallanes, viuda de Pontón, casa número 22 de la calle San Luis, 76, y locales segregados de éste, números 2 C, 2 D y 2 E, y al oeste, locales segregados de éste, denominados 2 A y 2 B. Finca número 15.111-N.

Tasado pericialmente en 300.000.000 de pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Santander, en primera subasta, el día 13 de diciembre de 1999. Caso de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, se

celebrará segunda subasta, el día 12 de enero de 2000. Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias, se celebrará la tercera subasta el día 9 de febrero de 2000. Todas ellas se celebrarán a las diez horas.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impedimento.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá la deudora librar su bien, pagando principal, intereses y costas.

Segunda.—Los licitadores deberán depositar, previamente, en el establecimiento bancario Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 3876-0000-64-0065/96, el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan a pujar en primera subasta, y el 15 por 100 (20 por 100 del tipo de la segunda subasta) de su valor en las otras dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta (artículo 1.500.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado y depositando en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 3876-0000-64-0065/96, el 20 por 100 (primera, segunda y tercera subastas) del valor del lote (20 por 100 del tipo de la segunda subasta) por el que se vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego se conservará cerrado por el Secretario judicial y serán abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas (artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—El ejecutante podrán tomar parte en las subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la valoración.

Sexta.—En segunda subasta, en su caso, el bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de la tasación, y por tanto no se admitirán posturas que no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Séptima.—En la tercera subasta, si fuere necesario celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 261 de la Ley de Procedimiento Laboral) Si hubiere postor que ofrezca suma superior se aprobará el remate. De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De o hacerse uso de este derecho se alzaré el embargo.

Octava.—En todo caso, queda a salvo el derecho de la parte actora de pedir la adjudicación o administración del bien subastado en la forma y con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.

Novena.—Los remates podrán ser en calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada en favor de los ejecutantes de los responsables legales solidarios o subsidiarios (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudicación del bien se realiza en favor de parte de los ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adjudicación es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De no ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Undécima.—El precio del remate deberá abonarse en el plazo de tres u ocho días (según se trate de subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes a la aprobación del mismo.

Duodécima.—Obra en la Secretaría de este Juzgado certificación registral en la que consta la titularidad del dominio del bien subastado y el estado de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser examinados, debiendo conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes preferentes, si los hubiere, al crédito de los ejecutantes continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes de este proceso en particular, una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria», y en cumplimiento de lo establecido en las leyes procesales, expido el presente en Santander a 5 de octubre de 1999.—El Secretario judicial, Miguel Sotorrio Sotorrio.—41.021.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en las demás responsabilidades legales, de no presentarse los procesados que a continuación se expresan en el plazo que se les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las autoridades y Agentes de la Policía Municipal procedan a la busca, captura y conducción de aquellos, poniéndolos a disposición de dicho Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Don José Campos Garrido, hijo de José y de Trinidad, natural de Barcelona, nacido el día 30 de diciembre de 1978, con documento nacional de identidad número 40.999.305, último domicilio conocido en calle San Bartolomeu, 1, 1.º, 1.ª, población San Bartolomeu (Barcelona), y actualmente en ignorado paradero, inculcado en las diligencias preparatorias número 45/06/98, seguida contra él por un presunto delito de abandono de destino, comparecerá en el término de quince días ante la Secretaría de este Tribunal, con sede en A Coruña (acuartelamiento de Santo Domingo, plazuela de Santo Domingo, sin número, bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca y captura de dicho individuo, que, caso de ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad militar más próxima para su ingreso en establecimiento militar, o, si esto no es posible, en común, a disposición de este Tribunal en méritos del referido delito y causa, en la cual se halla acordada su detención, extremos de los que se informarán al procesado al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega.

A Coruña, 22 de septiembre de 1999.—El Auditor Presidente, Luis Fernando Vigier Glaria.—41.174-F.

Juzgados militares

Don Jesús Lorenzo Martínez, hijo de Domingo y de Purificación, natural de Zamora, nacido el día 19 de septiembre de 1979, con documento nacional de identidad número 11.951.518, último domicilio conocido en Zamora, calle Cervantes, 4, 3.º, B, y actualmente en ignorado paradero, procesado en la causa número 44/04/98, seguida contra él por un presunto delito de insulto a superior, comparecerá en el término de quince días ante la Secretaría de este Tribunal, con sede en A Coruña (acuartelamiento de Santo Domingo, plazuela de Santo

Domingo, número 18), bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca y captura de dicho individuo, que, caso de ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad militar más próxima para su ingreso en establecimiento militar, o, si esto no es posible, en común, a disposición de este Tribunal en méritos del referido delito y causa, en la cual se halla acordada su detención, extremos de los que se informarán al procesado al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega.

A Coruña, 28 de septiembre de 1999.—El Auditor Presidente, Luis Fernando Vigier Glaria.—41.170-F.

Juzgados militares

Don Juan Carlos Pérez González, hijo de Luis y de Encarnación, natural de Ceuta, nacido el 4 de febrero de 1977, de estado civil soltero, de profesión no consta, con documento nacional de identidad número 45.097.283, y cuyo último domicilio conocido es urbanización «Monte Hacho», calle Sarchal, número 12, arriba, de Ceuta, actualmente en ignorado paradero, procesado en la causa número 24/04/99, seguida contra él por un presunto delito contra la hacienda en el ámbito militar, previsto y penado en el artículo 195 del Código Penal Militar, en el Juzgado Togado Militar número 23, comparecerá en el término de quince días ante dicho Juzgado, con sede provisional en Granada, Campo del Príncipe, sin número, bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles la busca de dicho individuo, que, caso de ser hallado, deberá ser informado de la obligación de comparecer ante este Juzgado Togado o, en su caso, de la obligación de permanecer en el domicilio donde se encuentre, al que sería citado para llevar en su persona las actuaciones pertinentes derivadas del mencionado procedimiento, comunicándose, caso de ser localizado, el domicilio a este Juzgado.

Granada, 28 de septiembre de 1999.—El Teniente Coronel Togado Militar, Enrique Yáñez Jiménez.—41.168-F.

Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las diligencias preparatorias número 11/47/99, por un presunto delito de abandono de destino, del soldado CLP don José Ignacio Ortega Nora, de veinticinco años de edad, hijo de Modesto y Camelia, de estado civil soltero, y con documento nacional de identidad número 44.403.000, para que dentro del término de diez días, contados desde el siguiente en que esta requisitoria aparezca inserta en los periódicos oficiales, comparezca ante este Juzgado Togado Militar número 11, sito en plaza Reina Cristina, número 7 (edificio del Gobierno Militar), de Madrid, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y depararle el perjuicio a que hubiere lugar, con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades civiles y militares que tan pronto tengan conocimiento del paradero del mencionado inculcado, procedan a su captura y, con las seguridades convenientes, le ingresen en prisión, a disposición de este Juzgado Togado.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Juez Togado, Eduardo Reigadas Lavandero.—41.144-F.

Juzgados militares

Don José Vicente Spiteri Sagastume, hijo de Vicente y de Inmaculada, nacido el 23 de agosto

de 1975, natural de Paracuellos del Jarama (Madrid), con documento nacional de identidad número 53.023.310, de estado civil soltero, profesión militar, con graduación militar soldado MPTM, inculcado en el procedimiento diligencias preparatorias número 26/19/99, por el presunto delito de abandono de destino, y con destino en el Regimiento de Caballería Alcántara número 10, de Melilla, comparecerá en el término de quince días ante don Gonzalo Zamorano Cabo, Juez Togado del Juzgado Togado Militar Territorial número 26 de Melilla, sito en la calle Gabriel de Morales, número 1, segunda planta, de Melilla, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo verificase.

Se ruego a las autoridades civiles y militares la busca y captura del citado individuo, que ha de ser puesto a disposición de este Juzgado Togado.

Melilla, 22 de septiembre de 1999.—El Juez Togado, Gonzalo Zamorano Cabo.—41.176-F.

Juzgados militares

Don David Valderrey Martínez, hijo de José y de Ana María, natural de León, nacido el 10 de noviembre de 1979, con documento nacional de identidad número 71.421.809, de estado civil soltero, con graduación militar Legionario MPTM, inculcado en el procedimiento diligencias preparatorias número 26/22/99, por un presunto delito de abandono de destino, y con destino en el tercio «Gran Capitán I» de la legión, en Melilla, comparecerá en el término de quince días ante don Gonzalo Zamorano Cabo, Juez Togado del Juzgado Togado Militar número 26 de Melilla, sito en la calle Gabriel de Morales, número 1 (establecimiento de Servicios Múltiples), segunda planta, en Melilla, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo verificase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca y captura de citado individuo, que ha de ser puesto a disposición de este Juzgado.

Melilla, 28 de septiembre de 1999.—El Juez Togado, Gonzalo Zamorano Cabo.—41.171-F.

Juzgados militares

Don Andrés Ascensión Marrero, hijo de Gregorio y de Andrea, natural de Las Palmas de Gran Canaria, nacido el día 30 de noviembre de 1978, de estado soltero, con documento nacional de identidad número 54.075.728, con domicilio conocido en Valle Jinamar, segunda fase, bloque quinto, Bajo-Telde (Las Palmas de Gran Canaria) y actualmente en ignorado paradero, inculcado en la causa número 52/11/98, seguida contra él por un presunto delito de abandono de destino o residencia, en el Tribunal Militar Territorial Quinto, comparecerá en el término de quince días ante dicho Tribunal, con sede en Santa Cruz de Tenerife (avenida 25 de Julio, número 3, primera planta), bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca y captura de dicho individuo, que, caso de ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad militar más próxima para su ingreso en establecimiento militar, o, si éste no es posible, en común, a disposición de este Tribunal en méritos del referido delito y causa, en la que se halla acordado su prisión preventiva, extremos de los que se informará al procesado al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 1999.—El Coronel Auditor, Presidente del Tribunal, Ignacio de las Rivas Aramburu.—41.175.